



PONENCIA DEL
C.MTRO.LIC.GABRIEL GARCIA ROJAS.
C.SRIO.LIC.RAUL ORTIZ-URQUIDI.
D-2208/957/2a.-PEDRO TORRES CAR-
DENAS.

Vo.Bo.
El Ponente.

----- México, Distrito Federal. ACUERDO de la Ter-
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la -
Nación, correspondiente al día treinta de septiem-
bre de mil novecientos cincuenta y siete. - - - - -

- - - - - V I S T O S; y, - - - - -

- - - - - R E S U L T A N D O: - - - - -

----- PRIMERO: Ante esta Suprema Corte ocurrió Ra-
fael Buelna Avilez, como apoderado de Pedro Torres
Cárdenas, en demanda de amparo contra actos de la
Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia --
del Estado de Sinaloa, que estimó violatorios de
las garantías consignadas en los artículos 14 y -
16 de la Constitución Federal que hizo consis--
tir, el que reclama, en la sentencia que con fe--
cha quince de febrero de mil novecientos cincuen-
ta y siete, pronunció dicha autoridad en el toca
a la apelación relativo al interdicto de retener
la posesión promovido por el quejoso en contra de
Rafael Guerra. - - - - -

----- SEGUNDO: Los antecedentes del caso, según --

los autos de primera y segunda instancias que se
leen a la vista, son los siguientes: Pedro To--
rres, mediante su escrito de fecha dieciocho de -
abril de mil novecientos cincuenta y cinco, ocu--
rrió ante el Juez Segundo de Primera Instancia de
lo Civil de Culiacán, exponiendo que en el año de
mil novecientos cuarenta y ocho entró a poseer un
solar ubicado en la esquina que forman la carrete-
ra a Novolato y la calle del general Lázaro Cárde-
nas en dicha ciudad, con las medidas y colindan-
cias que expresó en su libelo, habiendo construido

en el solar unos cimientos de piedra y mezcla, así como -- una pila de concreto y cemento para el abastacimiento de -- agua, pero que debido a sus enfermedades y a sus malos negocios no pudo terminar, sino hasta una altura como de metro y medio de profundidad y un medio metro fuera de la superficie; que al pasar por el solar unos días antes de su demanda, quedó sorprendido al ver que sobre los cimientos de referencia se habían levantado las paredes de una finca, y que al tomar informes del albañil y de los peones dedicados a dicha construcción, se enteró de que estos trabajos los había ordenado el señor Rafael Guerra, por cuya -- virtud, y considerando que éste carece de todo derecho para realizar la obra, se ve en la necesidad de demandarlo -- en la vía interdictal correspondiente, a fin de que suspenda las obras, no lo siga perturbando en su posesión y se -- le condene al pago de los gastos y costas del juicio, así como a los daños y perjuicios correspondientes. - - - - -

---- Admitida la demanda y corrido el traslado de ley, Rafael Guerra produjo su contestación negando la acción y exponiendo que el solar de que se trata no pertenece al actor sino al ejido del Vallado del municipio de Culiacán, -- del cual Pedro Torres nunca ha sido miembro y por tanto no tiene derecho a poseer ningún solar dentro de tales terrenos ejidales; pero que en el supuesto de que hubiese existido resolución presidencial creando la zona de urbanización de dicho ejido y el señor Pedro Torres hubiera adquirido el solar mediante contrato de compraventa o de arrendamiento celebrado con aprobación de la asamblea general -- de ejidatarios y del Departamento Agrario, sería necesario, de acuerdo con la ley, que aquél hubiera construido casa y no la hubiera abandonado durante los cuatro años en que lo hizo, puesto que inclusive basta con un año consecutivo de abandono para que esto implique la pérdida de derechos del poseedor; por lo que resulta claro, dice, que Torres care-



toda acción para demandarlo, ya que inclusive no vive en Talpa sino que desde hace varios años cambió su domicilio a Mexicali, de donde regresó hace algunos días tan sólo para intentar el juicio de que se trata. - - - - -

----- Seguido éste por sus demás trámites, el juez a quo lo resolvió mediante su sentencia de diecisiete de junio de mil novecientos cincuenta y cinco que concluye con las siguientes proposiciones: "PRIMERA: El actor demostró su acción; el demandado no acreditó sus excepciones. SEGUNDA: Se ordena poner término a la perturbación de la posesión que tiene el actor sobre el terreno descrito en el considerando primero de esta resolución. TERCERA: Se condena al demandado a pagar al actor una indemnización por concepto de los daños y perjuicios que le ocasionó con los autos perturbadores de la posesión a que se refiere esta sentencia. CUARTA: Se condena al demandado a pagar las costas que origine este juicio". - - - - -

----- Inconforme el perdedor con dicho fallo, lo recurrió en apelación con el resultado de haberse pronunciado por la Sala responsable, con fecha quince de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, la sentencia que ahora se le reclama por medio de este juicio de garantías y que a su vez concluye con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO: Se revoca la sentencia que motivó la alzada. SEGUNDO: El actor, Pedro Torres, no probó su acción, y el demandado, Rafael Guerra Cota, probó su excepción; en consecuencia, TERCERO: Se absuelve al demandado, Rafael Guerra Cota, de las pretensiones deducidas por el actor, Pedro Torres, en este juicio sumario civil de interdicto de retener la posesión del solar descrito en el libelo de demanda inserto en el resultando primero de este fallo. CUARTO: No se hace especial condenación en costas. QUINTO: Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse originales los autos de primera instancia al Juzgado del que proceden y, en su oportunidad, archí-

vese el toca". - - - - -

----- SEGUNDO: La demanda de amparo, presentada en tiempo, -
fué admitida en este Alto Tribunal el día cinco de junio de
mil novecientos cincuenta y siete, previa la recepción del
informe justificado de la responsable y el aviso del empla-
zamiento al tercero perjudicado. El Ministerio Público Fede-
ral se abstuvo de intervenir por estimar que el asunto care-
ce de interés público. La última actuación es de ocho de --
agosto del año en curso; y, - - - - -

- - - - - C O N S I D E R A N D O : - - - - -

----- PRIMERO: La existencia del acto reclamado se acredita
con el toca original remitido por la responsable en vía de
justificación y en el cual aparece pronunciado el fallo en
que aquél consiste. - - - - -

----- SEGUNDO: Estima el quejoso que dicho fallo vulnera en
su perjuicio las garantías constitucionales invocadas en -
su demanda, en virtud de que la autoridad que lo pronunció
conculcando los artículos 394, 398, 403, 410, 411 y 416 --
del Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa, tuvo por
no acreditada la acción interdictal deducida, no obstante
que de las pruebas rendidas resulta lo contrario, pero pa-
ra lo cual la responsable consideró indebidamente que el -
hecho de que él, el actor, confesó que empezó a construir
los cimientos y la pila de referencia desde mil novecien--
tos cincuenta, y que después y como consecuencia de sus en-
fermedades y sus malos negocios no pudo terminar la cons--
trucción de la casa, es bastante para justificar el abando-
no, cuando que con esta manifestación suya sólo puede pro-
barse que entró en posesión del lote aludido en el año in-
dicado, pero no más; que en la inspección judicial practi-
cada en el expediente relativo a la dotación definitiva --
del ejido del Vallado se comprobó que el terreno en cues-
tión tiene el carácter de baldío, a pesar de que en el ex-
pediente no se dió fe de la exacta identificación del pro-

D-2208-957/2a.



lote, y, finalmente, que le dió pleno valor probato--
a las declaraciones testimoniales de Pedro Monárrez -
y Buenaventura Peraza Sánchez con relación al aban-
do, a pesar de que éstos no declararon uniformemente so-
bre el particular. - - - - -

----- TERCERO: A fin de establecer debidamente si los ante-
riores conceptos de violación son o no fundados, precisa
ante todo decir que el argumento fundamental que tuvo la
responsable para resolver, revocando la sentencia de su -
inferior, que la acción interdictal deducida no llegó a -
demostrarse, es que siendo la materia propia de los inter-
dictos tan sólo la posesión interina, actual, de quien lo
promueve, y no habiéndose demostrado que en el momento de
los hechos estimados como perturbadores de la posesión, -
ésta la tuviera el hoy quejoso, aquélla llegó a la conclu-
sión, por el examen de las pruebas rendidas, que faltándo-
le a dicha acción tal base fundamental, no puede en mane-
ra alguna ser procedente. - - - - -

----- CUARTO: Ahora bien, es efectivamente cierto que, co-
mo lo estima la responsable, los interdictos no preocupan
cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, sino só-
lo de posesión interina; pero también lo es que esta preo-
cupación no es el medio, sino el fin de los interdictos.
O dicho de otro modo: a lo que todo interdicto tiende es
a proteger la posesión interina del promovente, bien que
se trate de adquirir, de retener o de recuperar tal pose-
sión, puesto que su real y positiva finalidad no es resol-
ver en definitiva acerca de la posesión a favor del que -
obtiene el interdicto, sino sólo momentánea, actual e in-
terinamente, dado que después de la protección así obteni-
da mediante sentencia judicial, puede muy bien discutir--
se la posesión definitiva en el juicio plenario correspon-
diente, e inclusive la propiedad en el reivindicatorio, -
sin que en forma alguna la resolución interdictal pueda -

invocarse en estos juicios con autoridad de cosa juzgada.- Así las cosas, claramente se ve que el apoyo de la responsable para declarar infundada la acción que en el caso se dedujo, resulta inconsistente y por ello mismo violatorio de las garantías invocadas por el quejoso, si se tiene en cuenta que con las pruebas rendidas, como luego se verá, éste acreditó la posesión actual del bien de que se trata, ya que en ninguna forma aparece que la haya perdido por -- ninguno de los medios establecidos al respecto por el artículo 828 del Código del Distrito y Territorios Federales, aplicable al caso, de conformidad con el artículo 1/o. del propio ordenamiento, por tratarse de un terreno ejidal sujeto al estatuto federal relativo establecido por el Código Agrario. En efecto, tal pérdida de la posesión no puede existir ni existe en el caso, en atención a que éste no se encuentra comprendido dentro de ninguna de las seis últimas fracciones (de la II a la VII) del artículo 828 del citado Código Civil, dado que estos medios o modos de perder la posesión ni siquiera fueron mencionados en el juicio, -- ni tampoco dentro de la fracción I del propio precepto que se refiere al abandono, ya que, como con todo acierto lo -- sostiene el quejoso en sus conceptos de violación, el hecho de que él haya confesado que empezó a construir los cimientos y la pila de referencia en mil novecientos cincuenta, sin que pudiera terminar la construcción total del inmueble porque no se lo permitieron sus enfermedades y sus malos negocios, en manera alguna significa, como indebidamente lo estimó la responsable, que aquél haya confesado el abandono, sino tan solo que desde dicho año entró en posesión del aludido lote. Tampoco es bastante la inspección -- practicada en el expediente relativo a la dotación definitiva del ejido del Vallado, porque en efecto, si bien es -- verdad que, como lo asentó la responsable, en la "relación de poseedores de lotes en la zona urbana del ejido del Va-



... municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, que está
 ... el día tres de marzo de mil novecientos cincuenta
 ... cuatro, aparece como baldío el lote cuestionado", tam--
 ... bién lo es que esta prueba no es bastante al respecto, si
 se tiene en cuenta que, como lo alega el quejoso, no se
 dió fe de la exacta indentificación del propio lote. Fi--
 nalmente, tampoco es bastante el testimonio de los seño--
 res Pedro Monárrez Azuela y Buenaventura Peraza Sánchez -
 con relación al mismo abandono, en consideración a que aun
 que es verdad que dichos testigos, al ser repreguntados -
 por la parte actora en relación con la pregunta tercera -
 del interrogatorio directo que les formuló el demandado,
 expusieron, el señor Monárrez, "que el solar está abando--
 nado más o menos desde mil novecientos cincuenta", y el -
 señor Peraza Sánchez, que el propio solar "está abandona--
 do desde el año de mil novecientos cincuenta a cincuenta
 y uno", también lo es que estas declaraciones no son bas--
 tantes por sí solas para justificar que realmente existe
 el abandono, dado que tratándose de una zona de urbaniza--
 ción en terrenos ejidales, el artículo 182 del Código - -
 Agrario exige la declaración de vacancia de dicho solar,
 pero que en el caso no existe. - - - - -
 --- Por otra parte, y aunque es cierto que el abandono -
 es una de las causas de la pérdida de la posesión, como -
 antes se vió, también lo es que este modo de perder aqué--
 lla debe ser demostrado por hechos indubitables como lo -
 comprueba el contenido del artículo 1142 del propio Códig--
 o Civil que se refiere a la misma materia por tratarse -
 de la prescripción por abandono de la posesión, cuando es
 tablece que la renuncia tácita de aquélla debe resultar -
 de hechos que importen el abandono del derecho adquirido
 / y que según textos antiguos romanos —Digesto, 41.2.44, pá
 rrafo 2— el simple alejamiento no induce abandono, a no
 ser que se manifieste por otros motivos el propósito de -

no poseer. - - - - -

---- Si, pues, todo es así, es concluyente que la resolución impugnada viola en perjuicio del quejoso las garantías constitucionales que al respecto invocó y en razón de lo cual debe amparársele, como procede resolverlo. - -


---- Por tanto, y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II, III y V, de la Constitución Federal; 45, 158, 186 y 190 de la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se falla: - - - - -

---- UNICO: La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Torres Cárdenas contra la sentencia que con fecha quince de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, pronunció la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el toca a la apelación relativo al interdicto de retener la posesión promovido por el quejoso en contra de Rafael Guerra. - - - - -

---- Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad designada responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente. - - - - -

---- Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos, siendo ponente el señor Ministro García Rojas. Firman los ciudadanos Presidente y Ministros con el Secretario de Acuerdos de la Sala que da fé. - - - - -

EL PRESIDENTE DE LA SALA:


Lic. Vicente Santos Guajardo.


#####




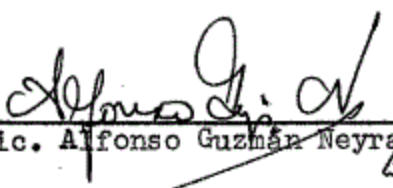
D-2208/957/2a.
Pedro Torres Cárdenas.

- 9 -

LOS MINISTROS:



Lic. José Castro Estrada.


Lic. Mariano Ramírez Vázquez.


Lic. Alfonso Guzmán Neyra.


Lic. Gabriel García Rojas.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS:


Lic. Abelardo Cárdenas Mac-Grégor.

29 OCT 1957

por lista de la misma fecha; se
retificó la resolución anterior a los interesados
al Ministerio Público Federal.





